

FAMILIA Y HOGAR DENTRO DEL TIPO PENAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COLOMBIANA

LUIS MANUEL MURILLO HURTADO
FABIAN ANDRES MONSALVE HENAO¹

Resumen: En el presente artículo de investigación se abordará la discusión respecto de las modificaciones al tipo penal de violencia intrafamiliar contenidas específicamente en el artículo 1 de la Ley 1959 de 2019, teniendo como referencia la regla jurisprudencial sentada por la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y un análisis crítico de los conceptos de familia y hogar. La metodología seguida es estrictamente documental enfocada en una estrategia analítica-conceptual que permita evaluar las diferentes normas y reglas jurisprudenciales aplicadas.

Palabras clave: Violencia, familia, hogar, parentesco, convivencia.

Abstract: In this Investigation article the discussion will be addressed regarding the modifications to the criminal type of domestic violence specifically contained in article 1 of law 1959 of 2019, taking as reference the jurisprudential rule set by the Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice of Colombia and a critical analysis of family and home concepts. The methodology followed is strictly documentary focused on an analytical-conceptual strategy that allows evaluating the different rules and jurisprudential rules applied.

Keywords: Violence, family, home, kinship, coexistence.

¹ Abogados, autores del presente artículo científico desarrollado en la especialización en Derecho Penal de la Universidad Libre Seccional Pereira 2019

Introducción

Se toma como punto de partida de la presente investigación, el precedente de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, según el cual se daba a entender el criterio determinante para corroborar la pertenencia a un núcleo familiar era la convivencia bajo el mismo techo, requisito que afectaba en gran medida el ámbito de protección punitiva de otros tipos de familias y hogares que se han estructurado conforme a los cambios económicos, sociales y culturales de las últimas décadas (Engels, 2006).

El problema surge de la necesidad de concretar los criterios interpretativos para entender en qué momento una conducta puede ser tipificada como violencia intrafamiliar, cuestión que cobra vital importancia para poder comprender e interpretar dentro de límites más precisos las nuevas reglas tenidas en cuenta para este tipo penal tomando como referencia los conceptos de familia y hogar que serán debidamente tratados en el marco teórico de la investigación.

Como parte del problema jurídico se analizó la sub-regla jurisprudencial consolidada por la Corte suprema de justicia en el año 2017 (Corte Suprema de Justicia, 2017), y en la cual se determina que se hace necesaria la verificación cohabitación o convivencia bajo un mismo techo como un elemento esencial para definir la unidad familiar y, por ende, para la subsunción del tipo penal de violencia intrafamiliar establecido por el legislador en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007. Sin embargo, este criterio pareciera no contemplar situaciones que convivencia que no se ajusten a la visión tradicional de familia nuclear y monógama, de las cuales se pueden deducir que también se generan lazos afectivos, de ayuda mutua y como un proyecto de vida en común, de donde se puede inferir

que se presenta un vínculo familiar, entendida ésta como formación social básica de toda comunidad.

De esta necesidad de ampliar el ámbito de protección punitiva de la familia, y a través de una iniciativa legislativa gestada por parte de la Fiscalía General de la Nación (Riveros, 2017), el Congreso de la república da vida jurídica a la Ley 1959 de 2019 la cual modifica tanto la Ley 599 de 2000 como la Ley 906 de 2004 en lo que respecta al tipo de violencia intrafamiliar, sin embargo esta nueva normatividad trae más problemas que soluciones a la hora de subsumir una conducta dentro de este tipo penal, pues, ante su falta de técnica legislativa, cualquier persona puede ser sujeto calificado de éste delito, sin importar si se encuentra vinculado o no al núcleo familiar. Ante esta circunstancia la pregunta que define al problema de investigación se presenta de la siguiente forma: ¿Cómo debe entenderse el concepto de núcleo familiar para efectos de la adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar en el marco del artículo 1 de la Ley 1959 de 2019 y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?

Se planteó como hipótesis, que para interpretar esta nueva norma era necesario redefinir el concepto de núcleo familiar de como ha venido sosteniendo la Corte Suprema, basándose principalmente en el grado de convivencia entre la víctima y el victimario y no en la simple cohabitación, circunstancia que puede verificarse acorde con unos criterios no taxativos que se dispone a presentar en el desarrollo de la investigación

El objetivo general que se propuso para responder a la pregunta de investigación fue el de determinar la forma en que debe interpretarse el concepto de núcleo familiar para efectos de la adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar en el marco del artículo 1 de la Ley 1959 de 2019 y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Para el desarrollo de

este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos, el primero fue describir el desarrollo jurisprudencial del tipo penal de violencia intrafamiliar en la jurisprudencia penal colombiana. El segundo, fue el de analizar de forma crítica el concepto de núcleo familiar planteado en el anterior desarrollo jurisprudencial y por último el de analizar lo dispuesto en el art.1 de la Ley 1959 de 2019 con base en los criterios ya desarrollados.

La presente investigación presta de especial relevancia desde el punto de vista de su novedad por cuanto trata tópicos y categorías analíticas de tipo jurídico recién desarrolladas por la jurisprudencia, así como normas de reciente creación como la Ley 1959 de 2019. Cabe resaltar la utilidad de estos análisis para los operadores jurídicos, toda vez que la adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar ha sufrido variaciones respecto de su marco normativo que pueden alterar en gran medida las sub-reglas jurisprudenciales sentadas por el máximo órgano de la justicia penal en Colombia.

Materiales y métodos.

Como materiales y métodos de investigación escogidos para abordar la presente investigación de corte cualitativo, el cual tomó como referencia método hipotético-deductivo, partiendo de la conformación de un cuerpo teórico que permite al investigador elaborar hipótesis con las cuales abordar el problema jurídico.

En este sentido, los hechos se valoran de forma abstracta para luego llegar a casos particulares, partiendo de conceptos y principios generales hacia una progresiva concreción hasta casos específicos, de ello que las fuentes de investigación sean aquellas normas y jurisprudencia que cuentan con ese carácter general, así como las investigaciones relativas al tema de la familia y el hogar, con el fin de dilucidar el significado primordial de la investigación, para lo cual se

tomaron como instrumentos de recolección de la información los propios de la investigación básica, esto al decir del recurso a la bibliografía sobre el tema, la sistematización y el análisis de la información, etc.

El tipo de investigación propuesto se presenta como un tipo de investigación jurídica de corte básico, por cuanto se torna esencialmente frente a conceptos y figuras jurídicas o con incidencia en normas jurídicas, y con un tipo de estudio jurídico descriptivo pues se hace uso el método analítico para descomponer los elementos esenciales del tipo penal y demás conceptos relacionados para la adecuación típica todos sus elementos más esenciales, planteando recomendaciones que permitan solucionar el problema planteado.

Como método escogido para abordar esta investigación fue el método deductivo, pues los hechos se valoran de forma abstracta para luego llegar a casos particulares, partiendo de conceptos y principios generales hacia una progresiva concreción hasta casos específicos. Las fuentes de investigación usadas se basan en la doctrina, las normas jurídicas y la jurisprudencia que hayan abordado el problema planteado, así como los demás conceptos relacionados. Por último, por tratarse de una investigación, básica, con un enfoque deductivo y cuyas principales fuentes son documentales, esta investigación tomó como sus principales instrumentos de recolección de la información los propios de la investigación básica, esto es, el recurso a la revisión bibliografía, así como la sistematización y el análisis de la información recolectada.

Marcos de referencia

Marco teórico.

En lo que respecta al marco teórico necesario para abordar la investigación se tomaron teorías clave dentro de la sociología y la antropología que vinculan conceptos como lo son la familia, el

hogar y el núcleo familiar. Los conceptos de familia y hogar adoptados en esta investigación se basan en las investigaciones de Federico Engels (2006), Lewis H. Morgan y Max Weber (2002), el concepto de hogar se analiza desde la perspectiva sociológica y se hace uso de los aportes investigativos de Fernando Sánchez-Bravo Villasante (2015).

Sin embargo, cabe aclarar que el presente trabajo, si bien presenta elementos traídos de la sociología y la antropología, no se concentra en un enfoque investigativo de corte socio-jurídico. Las investigaciones son aquí acogidas por su valor a la hora de aclarar conceptos clave dentro del derecho, sin embargo, el principal objetivo es el realizar un análisis de la norma jurídica (Ley) y su interpretación a través de la jurisprudencia, resaltando su eficacia jurídica a la hora de brindar protección punitiva a un bien jurídico tutelado, de ello que puedan categorizarse dentro de un paradigma más cercano al trialismo jurídico, que a un enfoque socio-jurídico, es decir, se retoman aportes conceptuales derivados de investigaciones sociológicas y socio-jurídicas que fungen de sustento para el análisis de los conceptos desarrollados en el tipo penal y en la jurisprudencia.

Si bien el presente artículo se enfoca en el análisis de los conceptos contenidos al interior de la norma jurídica y las reglas jurisprudenciales, existen categorías analíticas cuyo significado debe ser clarificado antes de iniciar el proceso investigativo. El primer concepto clave es el de familia, el cual desde una perspectiva histórico-sociológica como la propuesta por F. Engels puede ser entendida como un conjunto de relaciones sociales entre individuos que comparten estrechos lazos afectivos y consanguíneos, (posteriormente jurídicos) donde el ser humano se desarrolla en varios aspectos fundamentales e íntimos de su vida, sea sexual, afectivo,

psicológico. Sin embargo, su enfoque evolucionista de la familia fue abordado solo parcialmente, toda vez que se toma como supuesto que la familia tiende hacia una evolución histórica progresiva hacia la atomización, más se rescata el enfoque microsocioal desde la perspectiva que dicha atomización no siempre es homogénea y en la realidad social tienden a presentarse diversas estructuras.

El concepto de hogar se elabora a partir de los planteamientos de Fernando Sánchez (2015) hace referencia principalmente a un espacio o lugar donde un determinado grupo humano habita y realiza sus principales actividades domésticas. Ambos conceptos en la realidad social, y por regla general, se ven íntimamente relacionados, sin embargo, no pueden confundirse el uno con el otro pues pueden existir relaciones de familia sin que se comparta un hogar, y compartir un hogar sin existir relaciones de familia.

Estado del arte

Para abordar el problema de investigación preliminarmente se indagó por los estudios que permitieran orientar y dar claridad respecto de los elementos fundamentales del problema de investigación, a saber, investigaciones en torno de la familia y el hogar como elementos extrajurídicos, así como doctrina respecto del tipo penal de violencia intrafamiliar. Los actuales estudios sobre los temas centrales en los que gira la presente investigación y que constituyen el estado del arte que direccionó los debates que serán presentados son los siguientes:

Respecto de los estudios de la Familia se parte de la investigación del autor alemán Federico Engels (2006) en su libro *El Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado* publicado en 1884, en el cual se hace una importante compilación de investigaciones respecto al origen de la familia, como Lewis H. Morgan, M. Kovalevski, McLennan, entre otros, haciendo un brillante

análisis desde la perspectiva epistemológica del materialismo histórico. No se deja de lado los aportes de Max Weber en Economía y sociedad, respecto del concepto y evolución de la institución de la familia y las relaciones sociales que en ésta se gestan e investigadores latinoamericanos como Luis Barjau quien en teoría de la familia (S.f.) recoge los principales aportes respecto de esta institución, categorizando los distintos enfoques investigativos que han tenido por objeto su análisis.

Ya frente al análisis del “hogar”, los estudios en el campo de las ciencias sociales son menos variados, empero puede referenciarse autores como Ruth Nina Estrella (2006), investigadora del departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, y, de la Universidad de Oviedo en España el profesor del departamento de sociología Fernando Sánchez-Bravo Villasante (2015), los cuales condensan las principales conclusiones de investigaciones más relevantes que se han presentado frente al tema.

En materia jurídica, debido a las particularidades del derecho penal en cada nación, se abordaron distintos autores del ámbito colombiano. Razón de ello se tomó como referencia para el desarrollo teórico-jurídico principalmente aportes de doctrinantes como José Ferro (2006) quien de forma muy completa en su investigación analiza y descompone los elementos esenciales del tipo penal, requisitos para la antijuridicidad y la culpabilidad, los principios y bienes jurídicos que la norma presente proteger, así como los principales debates que giran alrededor de su aplicación. También se revisaron investigaciones como las de Luis Marino Urquijo (2016), quien complementa estos aportes analizando aspectos político criminales con el tipo de violencia intrafamiliar en Colombia y no se puede dejar de lado la importancia de la doctrina sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de cuyo protagonismo en el desarrollo del presente proyecto se da fe en el aparte de las referencias.

Marco Jurídico

Ante la pregunta por las condiciones jurídicas en las que se enmarca este artículo se advierte que este proyecto girará específicamente en la jurisprudencia sentada por la corte Suprema de justicia colombiana hasta el año 2019 antes de la publicación de la Ley 1959 de 2019, tomando como referente obligado la sentencia de Casación No 48047 del 07 de junio de 2017 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Magistrado Ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, como también los últimos desarrollos jurisprudenciales que han desarrollado más esta sub-regla jurisprudencial, como lo es la sentencia SP 964 – 2019 del 20 de marzo de 2019 radicado 46935 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, como referencia como la sentencia SP2251-2019 18 de Junio de 2019, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar.

Las demás referencias jurisprudenciales estarán debidamente contenidas en el apartado bibliográfico. En un sentido normativo el contexto presentado para esta investigación es estrictamente de orden nacional, de ello que para su estudio se tomen como normas imprescindibles la Constitución Política de Colombia, la Ley 599 de 2000 por medio del cual se expide el código penal Colombiano, la Ley 906 de 2004 por medio del cual se expide el código de procedimiento penal colombiano, la Ley 1959 de 2019 por la cual se modifican aspectos relacionados con el tipo penal de violencia intrafamiliar y la Ley 294 de 1996 la cual fue la primera norma en regular penalmente la violencia intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar en la jurisprudencia colombiana.

Las reformas introducidas por el legislador al código sustantivo de las penas convirtieron al tipo de violencia intrafamiliar, en la praxis, de ser un tipo penal subsidiario a uno principal, como también de pasar de ser uno delito querellable aun delito investigable de oficio. Sin embargo, las subreglas jurisprudenciales causadas por la necesaria interpretación judicial en el ejercicio de subsunción de la Ley penal, trajo consigo importantes parámetros a los cuales el estado a través de su ente investigador debía adecuar el ejercicio de la acción penal.

Para el constituyente la familia en Colombia se compone precisamente por una serie de vínculos naturales, como jurídicos, sin embargo, ha sido el legislador y la jurisprudencia los encargados de ampliar aún más el ámbito de reconocimiento y protección normativa de esta institución a lazos de afinidad y de convivencia, tales como a la llamada familia de crianza y a otras personas que no siendo parte del núcleo familiar estén unidos a él. En lo que respecta a la jurisprudencia familia en Colombia ha sido abordada como un conjunto de relaciones sociales y vínculos dados por la afinidad, la consanguinidad y otros creados por la Ley, como también se entiende como un espacio donde tanto niños como adultos desarrollan las diferentes facetas que integran su personalidad y su proyecto de vida alrededor de los integrantes de esta. (Corte Suprema de Justicia, 2017).

Así, la jurisprudencia de los tribunales colombianos ha acogido una noción extendida de familia, que va más allá de la familia nuclear y los lazos formados por el matrimonio y la consanguinidad, incluso extendiéndose a vínculos que pueden generar uniones de parejas del mismo sexo. Para ejemplificar este reconocimiento, ya es un criterio jurisprudencial muy sólido por la Corte Constitucional Colombiana que se reconozca como parte de la familia aquellas

personas que tengan especial vinculación con ella, como pueden ser los padrastros o hijos de crianza, siendo por ello necesario que dicha institución se aprecie desde una perspectiva pluralista y sustancial, aceptado que no existe un solo tipo de familia, ni una forma exclusiva de constituirla.² En materia de lo contencioso administrativo también ha tenido el Consejo de Estado oportunidad para pronunciarse, como en la sentencia del 2 septiembre de 2009, radicado 17997.

Ahora, entrando en materia penal es imperativo aclarar que la jurisprudencia ha sido más restrictiva en la protección de la familia, en parte, por ser el derecho punitivo la última ratio de todo el sistema jurídico. En efecto, la protección de la familia en Colombia se extiende a distintos campos de la actividad del Estado y no solo a través del derecho penal, siendo este el encargado de proteger no la familia en abstracto, sino aquel proyecto colectivo donde los individuos construyen sus relaciones de convivencia más sólidas y, por ello, más significativos en su desarrollo y determinantes para el ejercicio de sus capacidades y sus derechos, esto es conocido como el núcleo familiar.

El concepto de núcleo familiar es un tema central que determina el alcance de la protección estatal de la familia en el ámbito punitivo. Ya desde la Ley 294 de 1996, hasta el día de hoy, el delito de violencia intrafamiliar fue acertadamente delimitado a castigar exclusivamente aquellas circunstancias de maltrato respecto de los miembros del núcleo familiar, es decir que para el derecho penal no basta con maltratar a un miembro de la familia, se debe ser pues un miembro de este núcleo que, como dice la Sala Penal, “ha de ser comprendido a la luz del ordenamiento extrapenal (constitucional, civil y de familia) es el que cualifica los sujetos activo y pasivo de la

² Para sostener este argumento se pueden citar, entre muchas otras, sentencias como las T-572 y T-887 de 2009, la sentencia T-606/13 y la C-577 de 2011. También en materia civil, la Corte Suprema de Justicia en su sala civil STC14680-2015, 23 oct., rad. 2015-00361-02.

conducta sancionada en la violencia intrafamiliar, ya que los maltratos se tornan punibles si el agredido es una persona perteneciente al núcleo familiar del agresor.” Eso conlleva a preguntarse cómo se define ese núcleo familiar.

Dicho elemento del tipo fue desarrollado por primera vez de forma expresa por la Corte Suprema de Justicia en su sala Penal en sentencia 8064-2017 dentro del radicado 48047. En este caso, para definir sus límites, en primer lugar se asimilan las circunstancias de agravación punitiva del homicidio consagradas en el artículo 104 del código penal, que son las mismas que para el tipo de lesiones, y construye la siguiente subregla jurisprudencial, que determina que se presenta violencia intrafamiliar cuando el maltrato se produzca en cuatro circunstancias específicas.³

De estas reglas enunciadas se puede deducir pues que existen vínculos atemporales entre ciertos miembros de la familia que les hace de especial protección por parte del Estado, extendiendo éste su brazo punitivo con el fin de salvaguardarlos. Empero, respecto de las

³ La corte suprema de justicia establece los siguientes criterios: Entre cónyuges y compañeros permanentes entre sí. En este caso, siguiendo la línea del art. 229, se requiere que ambos hagan parte del mismo núcleo familiar, ello tomando en cuenta que el bien jurídico protegido es la Unidad y armonía familiar y no la vida e integridad personal que son bienes jurídicos protegidos con tipos penales como el homicidio y las lesiones. Por ello se requiere más que un vínculo formal, se necesita que éstos conformen realmente una familia. Se presenta también en los padres cuando el agresor es el hijo (o un descendiente) sin que importe si estos padres conviven. Para esta conclusión la corte examina lo dictado por el art. 2 de la Ley 294 de 1996 que determina, en otras palabras, que sí los cónyuges o compañeros convivan o no forman una familia, sin embargo, de ello no se deduce que conformen un núcleo familiar, para lo cual se requerirá siempre una convivencia. Por ello, al afirmar la Ley que el agravante del homicidio se presentará pues “en el padre o madre de familia, aunque no convivan juntos (SIC)” implica que se protege ese vínculo siempre respecto de los hijos hacia sus padres, sin que importe su vinculación al hogar, regla que es traída por la sala para ser aplicada también al delito que es objeto de este estudio. Es decir, que la no convivencia es irrelevante en materia de violencia intrafamiliar, solo cuando el maltrato recae sobre los padres, más no cuando la violencia se genera entre éstos últimos, convirtiendo en consecuencia la convivencia en un requisito esencial para determinar los miembros del núcleo familiar cuando no están emparentados por línea ascendente o descendente, como se verá en la siguiente regla definida por la corte. Cuando el maltrato se ejecuta en los ascendientes o descendientes y adoptivos que sean parte del mismo núcleo familiar. Como se observó, se presentará siempre violencia intrafamiliar si el maltrato se ejerce por parte de los hijos sobre los padres. Sin embargo, respecto de los demás ascendientes y descendientes se exige, además, el requisito del art. 229, donde se requiere un sujeto pasivo calificado, esto es, que sea parte del núcleo familiar. Por último, se vincula también a aquella persona que, no siendo parte del núcleo familiar, sea encargada del cuidado de uno o varios miembros de la familia, circunstancia contemplada por el Parágrafo del art. 229. He aquí una gran diferencia con los agravantes contemplados por el art. 104, por cuanto en este último se requiere que la persona haga parte de la Unidad doméstica de manera permanente, mientras que en el delito de violencia intrafamiliar la necesidad de vinculación a una unidad domestica no está taxativamente contemplada, verbigracia, comete también el delito la niñera que ocasionalmente acude al hogar maltrata a los niños menores que tiene a su cargo, así no esté integrada permanentemente a la unidad doméstica. (CSJ-SP, Sentencia 48047, 2017).

parejas, este vínculo pierde su protección especial cuando se pierde esa vida en común, es decir, que la vida en común, entendida esta como cohabitación, es un elemento sine qua non para saber si determinado miembro de la familia hace parte del núcleo familiar y, con ello, tipificar el delito de violencia intrafamiliar. Respecto de la existencia de hijos en común, estos no serán nunca óbice para suponer la convivencia entre los conyugues toda vez que cada uno tiene derecho a la autonomía y los derechos del hijo menor a tener una familia no implican per se que los padres pierdan dicha potestad.

Ahora, si se centra el análisis exclusivamente en lo que se refiere a conyugues y compañeros permanentes, como también pudiese ser hermanos, primos, tíos y otros familiares el verificar si existe convivencia es esencial para conocer su pertenencia o no del núcleo familiar. Ante esta situación ¿Qué entiende Corte por convivencia? Existen multiplicidad de formas de convivencia y la Ley no define exactamente qué tipo de convivencia se requiere para que ciertos individuos pertenecientes a la familia o a la unidad domestica sea considerados como parte del núcleo familiar.

Núcleo Familiar y Convivencia

Ahora, en lo que atañe a la delimitación de los sujetos no emparentados por línea ascendente o descendente, se mencionó anteriormente que para que se entiendan parte del núcleo familiar la sala planteaba dos criterios, uno afectivo y otro de convivencia. Frente al primero se puede decir que es innecesario en la praxis, por cuanto puede vincularse a sujetos como parte del núcleo familiar sin que entre ellos exista algún tipo de lazo afectivo. Verbigracia de aquellas personas que a su cuidado se encuentran un miembro de la familia.

Igualmente sucede entre exparejas que conviven bajo el mismo techo, mas no tienen un proyecto de vida en común, sin embargo, la necesidad de vivir bajo el mismo techo y convivir todos los días los hace ser parte del núcleo familiar, como se puede inferir de lo dispuesto en la sentencia de la sala penal define que para la tipificación del delito es necesario que el ente acusador demuestre tanto el maltrato físico como la vinculación al núcleo familiar, sea por vínculos de consanguinidad, jurídicos o por razones de convivencia (Corte Suprema de Justicia, 2014).

Es entonces cuando el segundo requisito, es decir, la convivencia se muestra como el elemento determinante según la Sala Penal para que se tipifique la violencia intrafamiliar entre conyugues y compañeros permanentes de hecho, en la praxis penal se ha evidenciado que es la verificación de la convivencia entendida como cohabitación, el criterio para determinar qué miembros de la familia hacen parte de dicho núcleo.

Desde este punto de vista, cuando dos compañeros o cónyuges deciden separarse, es decir romper con la cohabitación, también dejan de ser parte del núcleo familiar al sustraerse uno ese criterio tan esencial para la tipificación del delito, inclusive si se tienen hijos en común, pues “no hay duda que [SIC] los menores, mientras no se emancipen, tienen la condición de hijos de familia. Pero ello no puede conducir a la suposición artificiosa de que los padres, aunque se encuentren separados o inclusive aunque nunca hayan convivido, como puede ocurrir con el hijo fruto de una fugaz relación sexual, integren el núcleo familiar objeto de tutela dentro del ámbito de protección de la norma que se ocupa de la violencia intrafamiliar”, circunstancia que de ser considerada en sentido contrario, “claramente quebrantaría a los progenitores en su dignidad, autodeterminación y autonomía personal que se erigen en límites a la intervención del Estado” (Corte Suprema de Justicia, 2017)

En este orden de ideas, para la sala convivencia en pareja implica cohabitación y una separación necesariamente trae consigo la ruptura de esa convivencia cotidiana. Sin embargo, esta afirmación que no toma en consideración otras formas de interrelacionarse y de convivir, como cuando una pareja no se encuentra separada y mantiene lazos afectivos, aunque no se tenga un contacto diario o cotidiano, como también aquella pareja que pueda estar separada, no tener un proyecto de vida común, no vivir prácticamente bajo el mismo techo y aun así convivir de forma cotidiana, como sería el caso del “cambuche”.

En estas situaciones, si aplicamos las reglas establecidas por la sala, un acto de maltrato en el primer caso sería constitutivo de lesiones y, en el segundo, sería constitutivo de violencia intrafamiliar. De ello se puede derivar, como ya se afirmó, que no es el proyecto de vida en común, ni los lazos afectivos lo que determina la tipificación, sino la convivencia, siendo válida para la corte aquel tipo de convivencia que se da cuando víctima y victimario viven bajo un mismo techo. Ahora, ¿qué es para la sala la convivencia? ¿Puede existir convivencia cotidiana entre personas que no cohabiten?

Como es evidente, el criterio indiscutible según la sala para identificar los miembros del núcleo familiar será pues la convivencia bajo un mismo techo, desechando con ello otros tipos de convivencia que puedan darse entre nuevos tipos de estructuras familiares en las que se encuentran cada vez más variadas formas de mantener la convivencia, aunque no cohabiten un mismo espacio físico todo el tiempo.

Como es el caso del hombre o mujer que tengan simultáneamente un conyugue y un compañero permanente, circunstancia que no es ajena al derecho y en efecto ha sido reconocida tanto por la legislación como por la jurisprudencia en temas de seguridad social. No se puede

descartar tampoco los nuevos estilos de vida de los jóvenes modernos, trabajos y ocupaciones que no requieren un arraigo en un lugar fijo, nuevas redes de comunicación y transporte que permiten estar en contacto todo el tiempo con los demás miembros de la familia, como también el mantener comunicación constante y con ello la relación cotidiana con los demás miembros de la familia sin que ello implique la convivencia diaria bajo el mismo techo.

Claro está que la regla sentada por la Corte no implica necesariamente excluir este tipo de nuevas relaciones familiares y hogares, pero su falta de claridad deriva en una apreciación demasiado limitada de lo que es el núcleo y la convivencia familiar y de ello, un retroceso en la eficaz protección del bien jurídico tutelado.

Como una síntesis parcial, es posible afirmar que se necesita una comprensión más relacionado con lo que se deben entender por convivencia y núcleo familiar, ampliando los criterios para que tanto el juzgador, como el ente acusador, logren determinar si una determinada conducta es constitutiva de violencia intrafamiliar. Se trae pues a colación la sentencia, en la cual ha de rescatarse la brillante aclaración de voto expuesta por la magistrada Dr. Patricia Salazar Cuellar, que considera que la Sala dejó pasar una excelente oportunidad para fijar unos mínimos criterios interpretativos (Corte Suprema de Justicia, 2019), pues, si bien en su sentir en sentencia 48047-2017 nunca se establecieron criterios rígidos para determinar la pertenencia al núcleo familiar, sin embargo, en la práctica judicial se ha visto como se ha usado dicho precedente para convertir al que debiera ser un juicioso análisis de las condiciones de la convivencia, en un análisis mecánico y fragmentado consistente en la simple verificación de la residencia.⁴

⁴ La presente oración resume pues la hipótesis principal con la que se dio origen a la presente investigación: “Más allá de la situación particular que describe este caso, el criterio de vivir “bajo un mismo techo” se ve desafiado por la evolución de la familia contemporánea en un mundo globalizado, donde la movilidad de los integrantes de un núcleo familiar no puede valorarse bajo el concepto de hogar, entendido como “palabra que se refería al sitio donde se encendía el fuego, alrededor del cual se reunía la familia para calentarse y alimentarse” (SP8064-2017).

Se explican también, los criterios (no taxativos) para determinar ese grado de vínculo que se exige para ser considerado parte del núcleo familiar, entre ellos: “el paso del tiempo, la cercanía, los ámbitos y frecuencia de interacción, los asuntos comunes que los unen, la permanencia de nexos jurídicos o patrimoniales, las separaciones temporales o intermitentes, las rupturas seguidas de reconciliaciones, entre tantos otros.” Estos elementos deben ser verificados para considerar si un individuo hace parte del núcleo familiar, a lo que se suma los demás factores objetivos sostenidos en la sentencia 46.935, que son indispensables para determinar en el ámbito de la antijuridicidad un maltrato es constitutivo de violencia intrafamiliar.

Contexto de la Ley 1959 de 2019

Con la expedición de la Ley 1959 de 2019 se ha presentado un cambio radical en lo que se refiere a la tipificación del delito de violencia intrafamiliar, pues ha ampliado in extenso lo que se puede entender como núcleo familiar, incluyendo nuevos sujetos calificados que pueden ser actores de este tipo penal. Ahora, es cierto que a la citada norma jurídica se le pueden achacar censuras tanto de la perspectiva de la política criminal, como desde la técnica jurídica empleada en su elaboración. Sin embargo, no será objeto de este trabajo hacer ese tipo de análisis, será el verdadero objetivo de este análisis será brindar la perspectiva de este investigador frente a la nueva norma jurídica en lo directamente relacionado con el código sustantivo penal, es decir, la reforma al art. 229 de la Ley 599 de 2000, a la luz de lo que se ha venido decantando frente a los conceptos de familia, núcleo familiar, hogar y unidad doméstica.

En un primer término, desde el proyecto de Ley parte de una apreciación errónea de la jurisprudencia de la sala penal, pues, en la exposición de motivos de la Ley se crea una preocupación por la indefensión de los posibles maltratos que pudiesen sufrir los menores por

sus padres cuando no conviven en el mismo hogar, situación que no es del todo cierta, toda vez que el vínculo familiar entre ascendientes y descendientes se mantiene exista o no convivencia entre éstos.⁵

Ahora, la norma jurídica que fue sancionada involucra un número de sujetos que no son considerados como parte del núcleo familiar, sin embargo, pueden ser posibles sujetos activos o pasivos del delito. En este sentido, el núcleo familiar se desdibuja como criterio principal para la tipificación del delito y se postulan una serie de excepciones que dan a entender que el legislador busca proteger desde el ámbito punitivo a nuevas formas de familia que no se ajustan al arquetipo de familia nuclear, incluyendo el reconocimiento de la simultaneidad de las relaciones extramatrimoniales.

Sin embargo, cabe resaltar que el núcleo familiar seguirá siendo un tema importante para la determinación de ciertos sujetos activos y pasivos del delito, como es el caso de consanguíneos y colaterales como los hermanos, quienes no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 como integrantes de la familia. Por esta razón, se plantea en este trabajo que la verificación de la convivencia entre los sujetos en los términos propuestos para efectos la tipicidad de la conducta sigue vigente, pudiendo decirse que cobra más importancia por la delimitar los amplios márgenes establecidos por el legislador en la Ley 1959 de 2019.

⁵ Reza la doctora Maria Paulina Riveros Dueñas (2017), ponente del proyecto de Ley 139 de 2019 y que en ese entonces fungía Fiscal General (E): *“La definición legal expuesta anteriormente permite que el sujeto activo del delito sea cualquier miembro del núcleo familiar o incluso los encargados de su cuidado. Sin embargo, no sanciona aquellas conductas delictivas perpetradas como, por ejemplo, las relaciones extramatrimoniales que tienen el carácter permanente. También se encuentran excluidas las exparejas, o incluso la violencia de los padres contra los niños si no conviven bajo el mismo hogar. De hecho, una reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia indica que para que se configure el núcleo familiar es necesario que el perpetrador y la víctima convivan en el mismo techo”* (Proyecto de Ley, p.3)

En lo que respecta al literal a) frente a los compañeros permanentes se evidencia que mientras este cohabite con la pareja cualquier maltrato capaz de afectar el bien jurídico tutelado será constitutivo de lesiones, más queda la pregunta de los excompañeros, toda vez que no puede sancionarse de igual manera a quienes se conformaron como compañeros permanentes después de 2 años de convivencia que a quienes, teniendo una relación pasajera, convivieron por meses, semanas o quizá solo por días. Caso en el cual este investigador considera que la interpretación debe ser restrictiva, debiéndose acreditar por parte del ente acusador la calidad de una convivencia constante por más de dos años entre el agresor y el agredido en caso de que estos ya no convivan juntos.

En el literal a) también se vinculan los sujetos que no teniendo hijos en común realizan la conducta punible. Así, el literal b se referirá exclusivamente al maltrato entre padres, ello deberá interpretarse pues a la luz de los descendientes que se integran a la familia, siendo pues imputado por el art. 229, parágrafo 1, literal b, aquel quien maltrate al otro progenitor de hijos consanguíneos y adoptivos. Por cuanto una norma sancionatoria exige una interpretación restrictiva de la palabra “progenitor”, para efectos de imputación no podrá imputarse bajo el literal b) a los padrastros y madrastras propios de familias ensambladas. En este último caso, de presentarse el maltrato sea por parte de los padrastros o en su contra, el delito deberá imputarse bajo el literal a) o el c) del parágrafo 1 de dicho artículo 229, según sea el caso.

Por su parte, el literal c) se enmarca en lo establecido por la jurisprudencia respecto el parágrafo primero de la norma derogada, (modificado por la Ley 1850 de 2017), aunque se añade un elemento que amplía radicalmente el rango de sujetos activos, pues ahora no es relevante si el

cuidado del miembro del núcleo familiar sea en el mismo hogar, o en un lugar distinto, lo que prácticamente convertiría que todos los oficios que impliquen el cuidado y guarda de personas se pongan en la mira del legislador punitivo pues todos pertenecemos a una familia. Si a estos nuevos marcos eliminamos el requisito de que el sujeto activo pertenezca a la misma unidad doméstica, se interpretaría que tanto el maltrato del maestro en la escuela sobre un alumno, la enfermera sobre su paciente dentro de un instituto médico, entre otros, puedan ser tipificados como violencia intrafamiliar.

Entendiendo lo absurdo que puede ser esta conclusión, se hace claro que el maltrato constituirá violencia intrafamiliar cuando afecte el bien jurídico tutelado, esto es, la armonía y unidad de la familia, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales ya expuestos. Respecto del literal d, se hace necesario una definición clara de lo que se entiende por carácter permanente de una relación, sobre todo entre exparejas, toda vez que si algo se considera permanente lógicamente no tendría por qué disolverse. Para ello el legislador, con el fin de guiar la interpretación del concepto, ejemplifica que esta permanencia se caracteriza por una inequívoca vocación de estabilidad. Para complementar esta escueta definición, se propone que lo que se entiende por permanencia o vocación de estabilidad, debe guiarse tanto por principios prohomine e in dubio pro reo. Bajo esta razón, se considera que solo serán objeto de esta sanción punitiva aquellos sujetos que otrora, entre sí, conformaron un núcleo familiar, sea como conyugues o como compañeros permanentes

No se puede dejar en el tintero la importancia que cobra la verificación de la antijuridicidad a efectos de determinar la ocurrencia del delito estudiado, en especial con los nuevos problemas interpretativos surgidos con la expedición de la Ley 1959 de 2019. Ya en la sentencia SP964 de

2019 reafirma que no todo acto de maltrato es constitutivo de violencia intrafamiliar, para ello se requiere, como ya se ha dicho, la verificación de la pertenencia al núcleo familiar y, además cumpla un rol dentro de determinada estructura, en el ámbito de la antijuridicidad, que los actos sean capaces de afectar o menoscabar la armonía y unidad de la familia. Dentro de los elementos objetivos que el juzgador debe tener en cuenta para el análisis de estos actos debe tenerse en cuenta que las peleas casuales no son constitutivas de violencia intrafamiliar, el juzgador deberá pues evaluar pues estos elementos: “i) Las características de las personas involucradas en el hecho. (ii) La vulnerabilidad (concreta, no abstracta) del sujeto pasivo. (iii) La naturaleza del acto o de los actos que se reputan como maltrato. (iv) La dinámica de las condiciones de vida. Y (v) la probabilidad de repetición del hecho.

Conclusiones

En razón de la constante transformación de las relaciones sociales que conforman la familia el operador jurídico, requiere de herramientas interpretativas que lo vinculen al ámbito de protección estatal a los nuevos tipos de familia propios de una colectividad cada vez más liberal y pluralista. Para ello, la jurisprudencia colombiana ha dado origen a abundante doctrina que define y limita el ámbito de protección de la familia dentro de un Estado constitucional moderno, limitando las intromisiones abusivas en la esfera privada del individuo, pero sin dejar de lado la protección punitiva de este bien jurídico en casos más gravosos.

La sub-regla jurisprudencial sentada en la sentencia de casación 48047-2017 trae consigo un grave limitante para el intérprete y deja por fuera del amparo del Estado ciertos vínculos familiares que se gestan más allá de la cohabitación. De allí que se pone de manifiesto que se empiece a considerar la necesidad de que se gesten nuevas herramientas interpretativas que

permitan ver a la familia y el núcleo familiar desde el ámbito relacional, es decir, como un conjunto de relaciones sociales y no como un fetiche, es decir, como una cosa ligada a la residencia o al hogar, circunstancia que no ha pasado desapercibida por parte de la jurisprudencia y el legislador, quienes últimamente han intentado introducir nuevas variables que intenten vincular estos nuevos tipos de familia al alcance del poder punitivo del Estado, verbigracia la Ley 1959 de 2019, la cual considera un amplio espectro de sujetos y actos que pueden ser subsumidos dentro del tipo penal estudiado.

Por lo tanto, se concluye que conciliar la jurisprudencia penal de con el nuevo marco de referencia normativo, se hace necesario entender la violencia intrafamiliar y el núcleo familiar dentro de un contexto de convivencia y no de cohabitación. En efecto, si bien la Ley 1959 de 2019 amplió el rango de los sujetos dentro del tipo penal, la precitada norma jurídica no ha desechado la necesidad de verificación de pertenecía al núcleo familiar, razón por la cual se hace imperativo repensarlo en términos de grados de convivencia, donde el sujeto activo no resulte necesariamente ser quien cohabite bajo el mismo con la víctima, sino de quien maltrato afecte gravemente la armonía e integridad de su familia, entendida como ese ámbito relacional más íntimo de la persona.

A partir de las anteriores conclusiones, se plantean las siguientes

Recomendaciones

El principal criterio para considerar a un sujeto parte del grupo familiar es el grado de convivencia que tiene con los demás miembros. En este sentido, se acogen de manera meramente enunciativa los criterios dados por la Magistrada Dra. Patricia Salazar Cuellar, tales como: “el

paso del tiempo, la cercanía, los ámbitos y frecuencia de interacción, los asuntos comunes que los unen, la permanencia de nexos jurídicos o patrimoniales, las separaciones temporales o intermitentes, las rupturas seguidas de reconciliaciones, entre tantos otros.” En este sentido, se recomienda tanto al jurista y al operador jurídico hacer énfasis en determinar el grado de convivencia en términos relacionales entre víctima y victimario, siguiendo algunos de los parámetros propuestos en este documento, y no la simple constatación mecánica de la cohabitación, es decir, la convivencia bajo el mismo techo. Con ello, se podrá brindar de protección jurídico-penal a otras formas de familia, sin desbordar el ámbito de sanción punitiva establecido por el legislador. En este orden de ideas conviene pues no confundir y saber delimitar los conceptos de familia, hogar, núcleo familiar y unidad doméstica.

Para interpretar la nueva normativa respecto al tipo de violencia intrafamiliar, se hace determinante que el operador jurídico pueda delimitar el ámbito de sanción punitiva contenida en el art. 229 a través de una concepción del núcleo familiar pensado en una cuestión relacional y de intensidad del grado de convivencia, en el entendido de que solo será constitutivo del delito quienes, siendo compañeros permanentes, excompañeros permanentes, cónyuges y ex-cónyuges, tengan tal grado de convivencia que el maltrato sea significativo para afectar la armonía y unidad familiar, es decir, que entre los sujetos subsistan lazos tan fuertes que, de hecho, les conviertan en parte del mismo núcleo. Además, a parte de la verificación de los sujetos activos y pasivos del delito, se deberá verificar en el ámbito de la antijuridicidad

Referencias

- Alberdi, I. (2006) “Hogar” en Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza.
- Barjau, L. (S.F.). “La teoría de la familia” UNAM. México. Obtenido de:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/11146/public/11146-16544-1-PB.pdf
- Bourdieu P. (2001) Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao. Ed: Desclée de Brouwer.
- Bourdieu, P. (2001) Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao. Ed: Desclée de Brouwer.
- Cicchelli-Pugeautl, C. (1999), Las teorías sociológicas de la familia, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires(Obtenido de: La BLAA)
- Cisneros Trujillo, C. (2006) “La violencia intrafamiliar: política criminal de Estado”, tomado de,<https://d3gqux9sl0z33u.cloudfront.net/AA/AT/gambillingonjustice-com/downloads/233283/9-Cisneros9correg..pdf> Bogotá,
- Claude Levy-Strauss (1981) Las estructuras elementales del parentesco. Ed. Grupo Planeta.
- Congreso de Colombia (02 de Junio de 2004) “Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.”. (Ley 882 de 2004). Diario oficial: 45568.
- Congreso de Colombia (04 de diciembre de 2008) “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.”. (Ley 1257 de 2008). Diario oficial: 47193

Congreso de Colombia (05 de julio de 2012) “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.”. (Ley 1542 de 2012). Diario oficial: 48482

Congreso de Colombia (07 de Julio de 2004) “Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal.”. (Ley 890 de 2004,). Diario oficial: 45.602.

Congreso de Colombia (08 de noviembre de 2006) “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.”. (Ley 1098 de 2006). Diario oficial: 46446.

Congreso de Colombia (19 de Julio de 2017) “Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones.”. (Ley 1850 de 2017). Diario oficial: 50299.

Congreso de Colombia (20 de Junio de 2019) “Por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar”. (Ley 1959 de 2019). Diario oficial: 50990

Congreso de Colombia (24 de Julio de 2000) “Por la cual se expide el Código Penal”. (Ley 599 de 2000). Diario oficial: 44097.

Congreso de Colombia (28 de Junio de 2007) “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.”. (Ley 1142 de 2007). Diario oficial: 46673.

Congreso de Colombia (30 de Diciembre de 1972) “por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica",

firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969".. (Ley 16 de 1972). Diario oficial: 33780.

Congreso de Colombia (8 de julio de 1994) por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir remediar y sancionar la violencia Intrafamiliar. (Ley 294 de 1994). Diario oficial: 42836.

Congreso de Colombia, Proyecto de Ley No. 139 de 2017 Senado - 201 de 2018 Cámara “Por medio del cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar”

Constitución política colombiana (1991). Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, Colombia, 6 de Julio de 1991.

Corte Constitucional Colombiana, (01 de febrero de 2001) Sentencia C-059-05 [MP. Clara Inés Vargas Hernández]

Corte Constitucional Colombiana, (09 de agosto de 2001) Sentencia C-836-01 [MP. Rodrigo Escobar Gil]

Corte Constitucional Colombiana, (26 de julio de 2011) Sentencia C-577-11 [MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo]

Corte Constitucional Colombiana, (28 de abril de 2016) Sentencia C-368 de 2014 [MP. Alberto Rojas Ríos]

Corte Constitucional Colombiana, (28 de enero de 2009) Sentencia C-029-09 [MP. Rodrigo Escobar Gil]

Corte Constitucional Colombiana, (30 de junio de 2005) Sentencia C-674-05 [MP. Rodrigo Escobar Gil]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (03 de Diciembre de 2014) sentencia SP-41315, [MP Eíder Patiño Cabrera]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (04 de agosto de 2010) sentencia SP-34510, [MP Augusto J. Ibáñez Guzmán]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (07 de junio de 2017) sentencia SP-48047, [MP Luis Antonio Hernandez Barbosa]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (13 de Junio de 2013) sentencia SP-35764.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (18 de Junio de 2019) Sentencia SP2251-2019. Radicado 53048 [MP Patricia Salazar Cuéllar]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (20 de marzo de 2019) Sentencia SP 964 - 2019. Radicado 46935 [MP Eugenio Fernández Carlier]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (28 de marzo de 2012) sentencia SP-33772, [MP Julio Enrique Socha Salamanca]

Engels, F. (2006) El origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado. Ed.: Fundación Federico Engels. Madrid.

Ferro, J. (2016) Delitos contra la familia. En Lecciones de derecho penal parte especial. Bogotá. Ed: Universidad Externado de Colombia.

Meillassoux, C. (1977) Mujeres, graneros y capitales., México. Ed. Siglo XXI.

Murdock, G. (1975) “Nuestros contemporáneos primitivos / George Peter Murdock”; versión española de Teodoro Ortíz. México. Ed. Fondo de Cultura Económica. (Obtenido de: La BLAA)

- Nina Estrella, R. (2006) La vida cotidiana del hogar. En publicación: Revista de Ciencias Sociales no.15. CIS, Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
- Nussbaum M. (2006) Las fronteras de la justicia. Buenos Aires. Ed: Paidos.
- Nussbaum, M. (2006) Las fronteras de la justicia. Buenos Aires. Ed: Paidos.
- Pabón Parra, P. (2004) Delitos contra la Familia, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley
- Pirenne, H. (1979) Historia económica y social de la edad media. Fondo de Cultura Económica, México.
- Riveros Dueñas, M. (2017) Proyecto de Ley No. 139 de 2017 Senado - 201 de 2018 Cámara "Por medio del cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599. Congreso de Colombia.
- Rodríguez Fernández, N. (2012) "Un acercamiento a la familia desde una perspectiva sociológica", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Mayo 2012. Obtenido de: <http://www.eumed.net/rev/cccss/20/nerf.html>
- Sánchez, F. (2015) Notas para una sociología del hogar. Universidad de Oviedo, España.
- Urquijo Tejada; L. (2016) Aspectos dogmáticos y político criminales del delito de violencia intrafamiliar en Colombia. Universidad EAFIT, Medellín.
- Weber, M. (2002) economía y sociedad. Ed. Fondo de cultura económica. España.